

Potencia del tractor a la toma de fuerza (CV)	Velocidad (rpm)		Consumo específico (gr/CV hora)	Condiciones atmosféricas	
	Motor	Toma de fuerza		Temperatura (° C)	Presión (mm. Hg)

- b) Prueba de potencia sostenida a  $540 \pm 10$  revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observados ...	53,1	2.059	540	181	19	717
Datos referidos a condiciones atmosféricas normales .....	56,6	2.059	540	—	15,5	760

- c) Prueba a la velocidad del motor —2.350 revoluciones por minuto— designada como nominal por el fabricante.

Datos observados ...	57,1	2.350	616	187	19	717
Datos referidos a condiciones atmosféricas normales .....	60,9	2.350	616	—	15,5	760

- III. *Observaciones:* El tractor incorpora un eje de toma de fuerza de tipo I según la Directiva 86/297/CEE que, mediante el accionamiento de una palanca, puede girar a 540 ó 1.000 revoluciones por minuto. La velocidad de 1.000 revoluciones por minuto es considerada como principal por el fabricante.

## MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

**25590** *ORDEN de 27 de octubre de 1992 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 123/1989, promovido por don Juan Antonio Herranz Nieto.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 14 de marzo de 1992, en el recurso contencioso-administrativo número 123/1989, en el que son partes, de una, como demandante, don Juan Antonio Herranz Nieto, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la desestimación presunta del Ministerio para las Administraciones Públicas de la solicitud efectuada con fecha 21 de noviembre de 1988, sobre coeficiente aplicable al reconocimiento de un trienio.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que estimando totalmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Antonio Herranz Nieto contra la denegación presunta por silencio administrativo de su petición de que le fuera abonado el importe de un trienio en su sueldo como funcionario del Cuerpo de Gestión al que pertenecía cuando se cumplieron los tres años de su ejercicio como funcionario y reconocido en Resolución de 31 de julio de 1987, debemos declarar y declaramos la nulidad de dicha denegación tácita, por ser contraria a Derecho y, en consecuencia, debemos declarar y declaramos la obligación de la Administración, Ministerio para las Administraciones Públicas a abo-

narle la diferencia en el importe del trienio reconocido en 1986, entre lo que le ha sido abonado por el mismo y el que le corresponde como funcionario del Cuerpo de Gestión, desde el día I del mes siguiente a su devengo, hasta la fecha en que se le abone dicha diferencia, más los intereses legales desde la fecha de la reclamación, ya que la obligación había sido reconocida con anterioridad, e imponiendo las costas de este recurso a la Administración demandada.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a V. I.

Madrid, 27 de octubre de 1992.—El Ministro para las Administraciones Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

**25591** *ORDEN de 27 de octubre de 1992 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 780/1989, promovido por doña Pilar Patiño Briz.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 14 de diciembre de 1991, en el recurso contencioso-administrativo número 780/1989, en el que son partes, de una, como demandante, doña Pilar Patiño Briz, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la denegación de integración en la Escala Administrativa del INI, actualmente Escala Administrativa de Organismos Autónomos.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Pilar Patiño Briz, representada por el Procurador don Fernando Aragón y Martín, contra las Resoluciones de 19 de diciembre de 1984, 20 de julio de 1987 y 23 de enero de 1989, dictadas, respectivamente, por la Presidencia del Instituto Nacional de Industria y del Ministerio de Industria y Energía, que denegaron la integración de la interesada en la Escala Administrativa permanente o «viva» de dicho Instituto; debemos declarar y declaramos que tales Resoluciones no se ajustan al ordenamiento jurídico, y en su virtud, revocándolas y dejándolas sin efecto, acogemos la pretensión del recurso y declaramos el derecho de la recurrente a ser integrada a dicha Escala Administrativa, sin hacer expresa imposición de las costas causadas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, en lo que a su ámbito de competencias afecta, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 27 de octubre de 1992.—El Ministro para las Administraciones Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Función Pública.

**25592** *ORDEN de 27 de octubre de 1992 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 759/1989, promovido por don Emilio Alvarez Cangas.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 31 de enero de 1992, en el recurso contencioso-administrativo número 759/1989,

en el que son partes, de una, como demandante, don Emilio Alvarez Cangas, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 7 de septiembre de 1989, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local de fecha 20 de abril de 1989, sobre minoración de la pensión de jubilación.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Francisco Jesús Miranda Rivas, en nombre y representación de don Emilio Alvarez Cangas, contra la resolución de la MUNPAL de 20 de abril de 1989 por la que se le rebajaba la pensión de jubilación y se le declaraba una deuda de 45.540 pesetas por diferencias en lo cobrado, debemos anular y anulamos dicha resolución por no haberse seguido en absoluto el procedimiento de revisión de oficio establecido para dictar tal acuerdo; todo ello sin hacer expresa declaración en costas procesales.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 27 de octubre de 1992.—P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director técnico de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local.

**25593** *ORDEN de 27 de octubre de 1992 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo 1910/1988, promovido por don Miguel Pérez Beltrán.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado sentencia, con fecha 1 de julio de 1992, en el recurso contencioso-administrativo número 1910/1988, en el que son partes, de una, como demandante, don Miguel Pérez Beltrán, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 27 de octubre de 1988, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local de fecha 12 de diciembre de 1987, sobre pensión de gran invalidez.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: 1) Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Miguel Pérez Beltrán contra Resolución de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local (MUNPAL) de 12 de diciembre de 1987 por el que se consideraba al actor afecto de invalidez permanente, determinándose las prestaciones correspondientes a tal situación, y contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 27 de octubre de 1988 por la que se desestimaba recurso de alzada deducido contra la anterior; 2) declarar tales Resoluciones contrarias a derecho y anularlas y dejarlas sin efecto; 3) reconocer, como situación jurídica individualizada, el derecho del actor a que su jubilación por incapacidad permanente se produzca en base a su situación de gran invalidez, con los efectos previstos en los Estatutos de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, y con efectos desde el momento de su jubilación, y 4) no efectuar expresa imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 27 de octubre de 1992.—El Ministro para las Administraciones Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director técnico de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local.

**25594** *ORDEN de 27 de octubre de 1992 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo número 5.199/1990, promovido por don Joaquín Montañés González.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha dictado sentencia, con fecha 13 de febrero de 1992, en el recurso contencioso-administrativo número 5.199/1990, en el que son partes, de una, como demandante don Joaquín Montañés González, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas, de fecha 8 de octubre de 1990, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, de fecha 12 de junio de 1990, sobre cuantía de la pensión de jubilación.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo número 5.199/1990, interpuesto por el Procurador don Francisco Izquierdo Fernández, en nombre y representación de don Joaquín Montañés González, declarando la conformidad a derecho de las Resoluciones impugnadas precitadas en el fundamento jurídico primero de esta sentencia. Sin costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 27 de octubre de 1992.—El Ministro para las Administraciones Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22); el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director técnico de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local.

**25595** *ORDEN de 27 de octubre de 1992 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso-administrativo 1.569/1989, promovido por don Cristóbal Martínez Martínez.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado sentencia, con fecha 22 de enero de 1991, en el recurso contencioso-administrativo número 1.569/1989, en el que son partes, de una, como demandante, don Cristóbal Martínez Martínez, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 7 de septiembre de 1989, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local de fecha 1 de diciembre de 1988, sobre jubilación por invalidez ordinaria.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallo: En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Segunda, ha decidido:

Primero.—Estimar el recurso, declarando no ajustada a Derecho la resolución recurrida y que don Cristóbal Martínez Martínez tiene derecho a que se declare su jubilación por incapacidad permanente a partir del 1 de diciembre de 1988, con los efectos legales inherentes.

Segundo.—Sin mención sobre costas.»